

RECHAZAMOS ASESINATOS DE JOVENES EN VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO

La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia "ANTHOC", y el Departamento de Derechos Humanos y Misión Médica, rechaza y condena los asesinatos de adolescentes, jóvenes y demás colombianos perpetrados por los enemigos de la paz y la democracia.

Terminamos una semana con dolorosas noticias para los pueblos de los departamentos de Valle del Cauca y Nariño, donde se perpetraron masacres contra jóvenes estudiantes. Se trata de asesinatos selectivos en territorios sumidos por la desprotección del Estado, donde se acentúa con fuerza la problemática social y económica del país, actuando a sus anchos grupos al margen de la ley que pretenden infundir el terror y la zozobra en los pobladores para impedir las acciones de resistencia a las políticas gubernamentales en medio de la pandemia del coronavirus.

El 8 de agosto dos estudiantes, de 12 y 17 años de edad, fueron asesinados en la localidad de Leiva (Nariño) en momentos en que se dirigían a su escuela a entregar las tareas dejadas por sus profesores de forma virtual, ya que por la cuarentena del COVID-19 no hay clases presenciales. Tres días después, en la noche del martes 11 de agosto, los cuerpos de cinco menores de entre 14 y 15 años fueron encontrados con signos de haber sido torturados y asesinados en Llano Verde, un barrio del suroriente de la ciudad de Cali. En tanto, el sábado 15 de agosto, en el municipio de Samaniego (Nariño) son asesinados 9 jóvenes, entre los 17 y 25 años.

En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.

COMUNICADO



Responsabilizamos al gobierno nacional y al estado colombiano por mantener una política histórica del modelo de guerra, hambre, exclusión, miseria y pobreza, un modelo mafioso, que solo incentiva el miedo e impide la solidaridad entre los humildes, exhortamos al gobierno nacional para que se ponga al frente de estas dolorosas situaciones, y efectivamente se implementen medidas y actuaciones que protejan la vida de los colombianos, entre ellos, los líderes y lideresas sociales, jóvenes, defensores de derechos humanos.

Es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto.

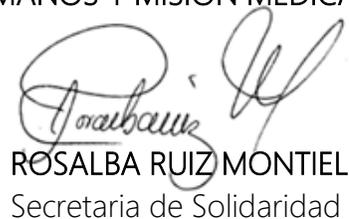
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ANTHOC


WILFER JHON PINZON FUENTES
Presidente


MARIA VICTORIA JIMENEZ SALAZAR
Secretaria General

DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y MISION MEDICA


DARWIN DUQUE
Vicepresidente
Coordinador Departamento DDHH


ROSALBA RUIZ MONTIEL
Secretaria de Solidaridad


ASTRITH GUALTERO CAICEDO
Secretaria de Asuntos Internacionales

Bogotá, D.C., agosto 18 de 2020